

Montreal, 18 de agosto de 2007

1^{er} Encuentro norteamericano de organizaciones del sector energético

Por el desarrollo nacional y democrático de los recursos energéticos en América del Norte.

Una declaración conjunta y solidaria de

Organizaciones

- Unión Nacional de trabajadores de confianza de la industria petrolera (UNTCIP)
- Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
- Alianza Nacional Democrática de los Trabajadores Petroleros (ANDTP)
- Sindicato Único de trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN)
- Comité national de l'énergie
- Frente Auténtico del Trabajo (FAT)
- Unión de los Metalúrgicos Unidos de América (USW)
- Sindicato de emplead@s de técnicas profesionales y de oficinas de Hydro-Québec – Sección local 2000 SCFP
- Sindicato de especialistas y profesionales de Hydro-Québec – Sección local 4250 SCFP
- Sindicato de empleados de oficio de Hydro-Québec – Sección local 1500 SCFP
- Sindicato de tecnólog@s de Hydro-Québec – Sección local 957 SCFP
- Sindicato canadiense de la función pública (SCFP)
- Sindicato de comunicaciones, de la energía y del papel (SCEP)
- Sindicato de comunicaciones, de la energía y del papel (SCEP) – Sección local 121 – Refinería de Shell Canadá en Montreal
- Federación de los trabajadores y trabajadoras de Québec (FTQ)
- Central de sindicatos democráticos (CSD)
- Confederación de sindicatos nacionales (CSN)
- Consejo central de Montreal Metropolitano - CSN
- Federación internacional de trabajador@s de la química, de la energía e industrias afines (ICEM)

Redes y Movimientos sociales

- Red mexicana de acción frente al libre-comercio (RMALC)
- Red quebequense frente a la integración continental (RQIC)
- Common Frontiers Canada
- Alliance for Responsible Trade (ART-US)
- Federación de Mujeres de Québec (FFQ)
- Asociación derecho a la energía – SOS Futuro
- Consejo de los canadienses
- Instituto Norte Sur
- KAIROS
- Coalición del Québec – Verde – Kyoto y Asociación quebequense de lucha contra la contaminación atmosférica (AQLPA)

Las trabajadoras y trabajadores del sector energético de México, Estados Unidos y Canadá, junto con nuestras contrapartes de la sociedad civil y los movimientos de solidaridad en el continente, declaramos a nuestros miembros y a los ciudadanos en cada uno de nuestros países, nuestro compromiso con el desarrollo nacional y democrático de nuestras industrias energéticas.

En esta ocasión nos reunimos ante la cumbre de Montebello sobre la *Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte* (ASPAN) que vincula a nuestros países en un nuevo marco para la integración continental basado en la agenda de seguridad de la presidencia de George Bush. Esta agenda se desarrolla con la complicidad del presidente Calderón y del primer ministro Harper, pero carece de legitimidad por parte de los pueblos de México, Canadá y Estados Unidos.

Compartimos las preocupaciones de los movimientos de la sociedad civil en tanto el ASPAN es un nuevo y poderoso instrumento creado por los gobiernos y las élites corporativas para orientar el destino de nuestras naciones, sin que haya una participación ciudadana ni mecanismos democráticos de vigilancia. Rechazamos la agenda de seguridad del ASPAN que vincula el TLCAN y el comercio a la restricción de las libertades civiles, al espionaje masivo, a la caracterización racial de las personas y a las fallidas y desastrosas políticas exteriores y militares de George W. Bush. Ponemos en duda los supuestos neoliberales para la prosperidad, que han llevado en cada uno de nuestros países a una disparidad cada vez mayor en el nivel de bienestar y a un desequilibrio del poder.

Sin embargo, como trabajador@s del sector energético estamos obligados antes que nada en responder a la agenda en materia de energía del ASPAN. Mediante el ASPAN y el Grupo de Trabajo sobre Energía de América del Norte, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá han establecido una colaboración sin precedentes con las corporaciones de energía para la promoción de la integración regional de nuestras industrias e infraestructura energética. Nueve grupos de trabajo han estado trabajando con intensidad para integrar las agencias del petróleo, gas natural, electricidad, energía nuclear, hidrocarburos, ciencia y tecnología y de regulación. Mientras que estos grupos de trabajo reúnen a gobierno, reguladores y corporaciones al más alto nivel, han excluido a l@s trabajador@s, ambientalistas y movimientos de la sociedad civil y se han sustraído de la vigilancia de nuestras legislaturas electas.

La agenda corporativa del ASPAN, que busca institucionalizar la lógica continental empresarial a costa de los planes de desarrollo local y nacional, incluye:

- La integración completa de las redes de electricidad entre nuestros países y la continuación de la desregulación de la electricidad en cada país con el fin de favorecer la generación de electricidad para la exportación.

- La promoción de un sistema integrado amplio de terminales de gas natural, y de importaciones de gas natural líquido (GNL) para enfrentar la escasez que dentro poco se vislumbra en el abastecimiento de gas.
- El objetivo de volver “más eficiente” ciertos procesos regulatorios en cada país a la vez que se desregula los proyectos de oleoductos transfronterizos, se aspira a quintuplar la producción en el área de las arenas bituminosas en Canadá, y se mantienen los esfuerzos de privatización de las industrias energéticas.
- La intervención directa de los Estados Unidos para garantizar la seguridad de las instalaciones de energía

Estos y otros elementos de la agenda corporativa del ASPAN no son sustentables y sacrifican las necesidades de l@s trabajador@s y las comunidades en cada país a favor de las ganancias de las corporaciones de energía. Se trata de una agenda que no atiende la necesidad en cada país de reducir las emisiones de gas, incluyendo una nueva ronda de metas de largo alcance después del año 2012. Este modelo corporativo continental de energía tampoco responde a las necesidades de desarrollo económico ni reconoce el papel central que en el desarrollo económico comunitario juegan las industrias energéticas.

Compartimos el temor que la promoción de bio-combustibles y del etanol amenaza a la estabilidad económica agrícola y a la soberanía alimentaria en América del Norte. Los productores agrícolas así como los consumidores no pueden ser sacrificados en el altar de las inversiones especulativas y no sustentables de las nuevas industrias de bio-combustible.

L@s trabajador@s de energía en cada uno de nuestros países tienen un sentido de urgencia y profundas preocupaciones en torno a las políticas energéticas equivocadas que se están dando en el contexto del ASPAN.

En Estados Unidos:

- La oposición de Bush y Exxon a los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático global;
- La desregulación de la energía, favoreciendo fraudes corporativos como el de Enron;
- El aumento de los costos de la energía para las familias trabajadoras y la industria;
- El cierre de 50 refinerías de crudo en los últimos 12 años;
- La creciente dependencia del petróleo extranjero.

En México

- La privatización anti-constitucional de la industria energética de México, que protege la Constitución;
- Las amenazas repetidas de privatizar PEMEX;

- Las industrias petrolera y petro-química que operan a 80% y 50% de su capacidad respectivamente;
- Las restricciones que pone Estados Unidos al desarrollo de la energía nuclear en México;
- Las políticas económicas neoliberales;
- El ataque a las libertades sindicales de l@s trabajador@s de la energía;
- El debilitamiento del rol del Estado y de su necesario liderazgo en materia de energía y de desarrollo.

En Canadá:

- El incumplimiento de las metas de Kyoto;
- La negación de las necesidades canadienses en materia de seguridad energética;
- El desarrollo de las arenas bituminosas basado en las exportaciones de bitumen;
- Las exportaciones de gas natural y la pérdida de trabajos en la industria petroquímica;
- La desregulación de la electricidad y las fallas de la lógica mercantil.

Las industrias energéticas en cada uno de nuestros países deben de estar guiadas por el principio común de la democracia y la sustentabilidad.

Afirmamos la responsabilidad y el derecho que tienen los gobiernos electos democráticamente de definir las políticas energéticas a nivel nacional y local, de defender y promover la propiedad pública en el campo de la producción y distribución de energía, y de regular las actividades de las empresas privadas de energía en un marco de política nacional y local. El acceso a los recursos energéticos para satisfacer las necesidades humanas básicas es un derecho de la ciudadanía y no debe ser negado por mercados injustos y la avaricia corporativa. Los recursos energéticos en cada uno de nuestros países pertenecen a sus pueblos y deben ser administradas democráticamente en función del interés público.

Las redes de energía, la calefacción de los hogares, el transporte de combustibles y las fuentes de energía para la industria son factores necesarios y estratégicos en el desarrollo nacional y local. Estas industrias proveen de buenos trabajos que sostienen a familias y comunidades. Rechazamos el modelo de desarrollo energético que sacrifica la producción y abastecimiento local de energía a favor de sistemas de suministro por redes continentales, que nunca cesan en su empeño por eliminar la fuerza de trabajo. Apoyamos el derecho de las comunidades locales de demandar que los recursos de energía sean manejados localmente para que alcancen el valor más alto posible.

L@s trabajador@s de la energía entienden las transformaciones históricas que son necesarias para alcanzar la sustentabilidad energética global. El petróleo, el gas, el carbón y otras industrias basadas en el carbón, están afectadas por las medidas que se deben tomar para enfrentar el cambio climático global y reducir de manera dramática las emisiones de gas con efecto invernadero. La hidroelectricidad y la energía nuclear a

gran escala también enfrentan retos ambientales formidables. L@s trabajador@s de la energía entienden la necesidad de conservar y ser más eficientes con el uso de la energía, y la importancia de desarrollar nuevas industrias de energía renovable, así como de nuevas políticas en cada país que puedan tener un impacto en la seguridad en el empleo. Estamos preparados para ser parte de la solución que se fundamente en una *Transición Justa*, y que garantice que l@s trabajador@s y las comunidades no tengan que soportar de manera injusta todo el peso del cambio social y ambiental.

La sustentabilidad y el desarrollo nacional y local de los recursos energéticos no pueden alcanzarse sin el involucramiento democrático de l@s trabajador@s y las comunidades. La política energética no encontrará sus metas sin las voces de los sindicatos de la energía y las comunidades.

Condenamos las políticas de restricción a los sindicatos que muchas corporaciones de la energía adoptan, y el fracaso de los respectivos gobiernos de garantizar el derecho de l@s trabajador@s a organizarse libremente en estructuras sindicales independientes y democráticas.

Nos comprometemos a propiciar una nueva solidaridad hemisférica de trabajador@ a trabajador@ para asegurar el crecimiento de nuestros sindicatos y la negociación de fuertes acuerdos colectivos con los empleadores. A través de la ICEM (Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas) y la UIS-TEMQPIA (Unión internacional de sindicatos de trabajadores de la energía, metal, química, petróleo e industrias afines) y otros cuerpos sindicales internacionales, estableceremos redes fuertes y responderemos a los llamados de solidaridad cuando nuestros miembros se embarquen en luchas sindicales y comunitarias.

Nos comprometemos en crear mecanismos de coordinación entre el presente foro y el *Foro latinoamericano y caribeño de trabajadores de la energía* para compartir experiencias y emprender acciones comunes frente a los planes de integración energética.

Continuaremos trabajando con nuestros aliados sociales en los movimientos de solidaridad del continente para reunir a l@s trabajador@s de los países y para juntos enfrentar las consecuencias dañinas de los injustos tratados de comercio y de las políticas neoliberales de globalización.

Las políticas energéticas darán forma a nuestro mundo en el siglo XXI. Estas políticas llevarán ya sea a un desarrollo democrático y sustentable, o al desastre ambiental global y a nuevas guerras de agresión. L@s trabajador@s de la energía, sus sindicatos y sus aliados en México, Canadá y Estados Unidos actuaremos juntos por el desarrollo nacional, democrático y sustentable, de nuestros recursos energéticos.